

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, trece (13) agosto de dos mil veinte (2020)

AUTO No. 162

MAGISTRADO PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTALORA

ACCIÓN:	REPARACIÓN DIRECTA
EXPEDIENTE:	76147-33-33-001-2015-01046-01
DEMANDANTE:	LAURA CRISTINA TABARES GIL Y OTROS
DEMANDADO:	RAMA JUDICIAL Y OTROS
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA AUTO QUE NIEGA DECRETO DE PRUEBAS.

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se decide el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto de fecha 17 de septiembre de 2019, proferido en audiencia inicial por el Juzgado Primero Administrativo de Cartago que negó el decreto y practica de una prueba testimonial y de la trasladada.

II. ANTECEDENTES

En ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 140 del CPACA y actuando a través de apoderado judicial, la señora Laura Cristina Tabares Gil y otros, demandaron a la Rama Judicial y otros, para que se declaren responsables por los daños y perjuicios ocasionados al señor Cesar Augusto Salazar Arenas privado de la libertad en hecho acaecidos el 30 de septiembre de 2012.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto del 17 de septiembre de 2019 proferido en audiencia inicial¹, el Juzgado Primero Administrativo de Cartago decretó inicialmente la prueba testimonial y la trasladada solicitadas por el apoderado judicial de la parte demandante, sin embargo, teniendo en cuenta los argumentos expuestos por las entidades demandadas en el recurso de reposición interpuesto, el *A-quo* negó el decreto de dichas pruebas (Min:10:50:05). Los antecedentes de dicha decisión son los siguientes:

Con ocasión a las pruebas solicitadas por el apoderado judicial de la parte demandante obrantes a folio 11 y 12 del expediente, encaminadas a que se decrete el traslado del expediente que conforma el cuaderno de pruebas del proceso nro. 76-147-3333-001-2014-00934-00 adelantado en el Juzgado Primero Administrativo de Cartago y se oficie al Centro de Reclusión de Caicedonia para que allegue el acta de visitas recibidas por el señor Cesar Augusto Salazar Arenas durante el tiempo en que estuvo recluso, consideró que al ser conducentes y pertinentes debía ser decretadas.

¹ Folio 14

Frente a los testimonios solicitados por la parte actora, dedujo que, al omitir indicar la dirección de residencia de los mismos, la carga de la comparecencia de los testigos al Despacho recaería en el apoderado judicial.

El apoderado judicial de la parte demandada, Fiscalía General de la Nación, presentó recurso de reposición contra el auto del 19 de febrero de 2020 proferido en audiencia inicial por el Juzgado Primero Administrativo de Cartago, argumentando (Min:10:58:03):

Que la solicitud de decreto y práctica de la prueba trasladada carece de objeto y con relación a la testimonial, argumentó que no cumple con los requisitos exigidos en los artículos 212 y 213 de CGP, porque no se relacionó la dirección de los testigos.

Por su parte, la apoderada judicial de la Rama Judicial interpuso recurso de reposición frente al decreto de la prueba trasladada argumentando que carece de objeto.

Con ocasión al recurso de reposición interpuesto, el Juzgado Primero Administrativo de Cartago consideró que el apoderado judicial de la parte demandante no manifestó el objeto de la prueba trasladada, pues no explicó la finalidad de la misma y frente a la prueba testimonial, consideró que tampoco cumple con el mínimo de los requisitos exigidos por la Ley, ya que no suministró la dirección de notificación de los testigos y si bien, este medio de prueba resultaría importante para demostrar las pretensiones solicitadas, lo cierto es, que el actor debe cumplir una carga mínima exigida por el CGP.

En virtud de los anteriores planteamientos, modificó el auto inicialmente proferido y en consecuencia, negó el decreto y práctica de las pruebas testimonial y la trasladada solicitadas por el apoderado judicial de la parte demandante.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La apoderada judicial de la parte demandante presentó recurso de apelación contra el auto del 19 de febrero de 2020 proferido en audiencia inicial por el Juzgado Primero Administrativo de Cartago, argumentando (Min:11:10:57): Que el objeto de la prueba trasladada es claro y la prueba testimonial solicitada es conducente y pertinente, pues con respecto a los domicilios de los testigos se impuso la carga de hacerlos comparecer al Despacho.

V. CONSIDERACIONES:

5.1. Competencia

De conformidad con el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se niega el decreto o la práctica de una prueba es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala:

*“Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:
(...)”*

9. *El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.*”

5.2. Problema Jurídico

El asunto que se discute se contrae a establecer:

Si la decisión proferida por el *A-quo* que negó el decreto de la prueba testimonial y trasladada solicitadas por la parte demandante se encuentra ajustada a derecho.

Para resolver el problema jurídico, el Despacho analizará: (i) Requisitos generales de las pruebas, (ii) la carga de la prueba y (iii) el caso concreto.

5.3. Tesis del despacho

El Despacho revocará la decisión tomada por el *A-quo*, pues en virtud de lo dispuesto en el artículo 174 del CGP, las pruebas trasladadas deben ser apreciadas sin más formalidades que las expuestas en dicha disposición y, frente a la prueba testimonial solicitada, debe ser decretada ya que la omisión en que incurrió la parte demandante, no indicar el domicilio de los testigos, puede ser subsanada imponiendo la carga de la notificación a la parte interesada en su práctica.

5.4 Requisitos generales de la prueba

Para establecer la pertinencia, conducencia y procedencia de las pruebas solicitadas, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 167, 168 y 169 del Código General del Proceso.

Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

“(…)”

Artículo 168. Rechazo de plano. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

Artículo 169. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. “(…)”.

El Consejo de Estado (2019)² definió el concepto de pertinencia, contundencia, utilidad y licitud en los siguientes términos:

Atendiendo a que, conforme con el criterio jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en las providencias citadas *supra*, para analizar si una prueba es legalmente prohibida o ineficaz, o si versa sobre hechos notoriamente impertinentes o es manifiestamente superflua, se debe verificar si cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y licitud.

Conforme a la jurisprudencia señalada *supra*, se considera que para verificar: **i) la pertinencia** de una prueba se debe revisar que el hecho que se pretende probar guarde relación con el objeto del proceso; **ii) la conducencia** de una prueba se debe revisar que

² Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de diciembre de 2019, radicación nro. 11001-03-24-000-2011-00056-00.

el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar³; **iii)** la **utilidad** de una prueba se debe revisar que no sea manifiestamente superflua, es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba⁴; y **iv)** la **licitud** de la prueba se debe revisar que no haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales⁵.

Ahora bien, el artículo 212 del CPACA consagra las oportunidades para solicitar o aportar pruebas:

“(....)

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas...

5.5 Carga de la prueba

El inciso 4 del artículo 103 del CPACA dispone que “*Quien acuda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este código*”.

Sobre la carga de la prueba, el Consejo de Estado (2011)⁶ enseña que corresponde al actor demostrar los supuesto facticos en los cuales fundamenta las pretensiones, así:

El artículo 177 del Código de Procedimiento Civil consagra el principio de la carga de la prueba, que se explica afirmando que al actor le corresponde demostrar los supuestos fácticos en los cuales funda su pretensión y al demandado los hechos en que finca la excepción. Y de acuerdo con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil “Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso”. Ahora bien, como lo ha manifestado la jurisprudencia nacional en materia de la carga de la prueba, para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación; pues ninguna de las partes goza de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B providencia de 23 de julio de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 25000-23-25-000-2007-00460-02.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de 3 de marzo de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación 11001-03-25-000-2015-00018-00.

⁵ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia de 11 de abril de 2018. M.P. Eugenio Fernández Carlier, número único de radicación 43533. “[...]en la jurisprudencia se ha distinguido desde hace tiempo entre prueba ilegal y prueba ilícita, división con la que se alude, en el primer caso, a aquéllas que padecen yerros en las formas propias de ordenación, práctica y/o incorporación a la actuación (debido proceso probatorio), y en el segundo, a aquéllas obtenidas, en general, con desconocimiento de las garantías fundamentales de las personas, por ejemplo, por violación de los derechos a la no autoincriminación, a la solidaridad íntima, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, etc. [...]”.

⁶ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2011, radicado nro. 05001-23-26-000-1994-02376-01(18048).

propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes, la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa, resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la demandante, debe anotarse que quien presenta el libelo demandatorio sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, conoce de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos. Sobre la carga de la prueba esta Corporación explicó: “En procesos contenciosos o controversiales como el presente, el juez no puede adoptar decisiones que no estén fundadas en las pruebas debidamente allegadas al proceso, ni le corresponde descargar a las partes de sus deberes probatorios, puesto que se incurriría en una violación flagrante de los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil, así como también se estarían vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del interviniente que resulte afectado...”.

6. CASO CONCRETO

En el presente asunto la parte demandante, solicitó como pruebas⁷ las siguientes:

1) Prueba testimonial:

“Para probar los perjuicios sufridos por los suegros de la víctima LUIS ALFONSO TABARES CASTAÑO y LUZ MARY GIL JIMÉNEZ (tanto morales como a la vida de relación y/o familiares), se citarán como testigos a las siguientes personas:

-Alba Yulieth Rodríguez, CC. 1.115.185.031
-Brillite Julieth Vélez Cardona, CC 66.964.006

Para probar los daños a la familia y/o vida de relación sufridos por la señora esposa de la víctima LAURA CRISTINA TABARES GIL y su menor hijo MARTÍN SALAZAR TABARES, se citarán como testigos a las siguientes personas:

-Sandra Milena Arroyave, CC 41.945.843
-Lina María Cardona Cardona, CC 41.956.757

Para probar los perjuicios sufridos por la Tía de la víctima MARIBEL ISABEL ARENAS DE HURTADO, así como los perjuicios a la familia y/o daño a la vida de relación del hermano y madre de la víctima, se citarán testigos a las siguientes personas:

- David Andrés Zorrila, CC 80.715.001
- Oscar Mauricio Niño, CC 94.254.832
- Gustavo Adolfo Rojas, CC 94.462.740
- Ricardo Adrian López, CC 94.463.437
- Dora Helena Álvarez Niño, CC 66.963.810

2) Prueba Traslada

“ (...) se decrete como prueba trasladada todo el expediente que conforma el cuaderno de pruebas del proceso radicado bajo el No. 76-147-3333-001-2014-00934-00 que cursó en el Juzgado 01 administrativo de Cartago y en donde fungen como parte demandada las mismas personas igualmente accionadas, lo que implica que dichas pruebas fueron debidamente sometidas al derecho de contradicción, lo que supone la posibilidad de su traslado y valoración”.

El artículo 174 del CGP dispuso:

⁷ Folio 11 del expediente.

“Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtir la contradicción en el proceso al que estas destinadas. La misma regla aplicará a las pruebas extraprocesales.

La valoración de las pruebas trasladadas extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderá al juez ante quien se aduzcan”

El Consejo de Estado⁸ frente a dicha prueba y su valoración, ha manifestado:

Frente a la valoración de la prueba trasladada, esta Corporación ha señalado que aquella debe cumplir con los requisitos previstos en la normativa procesal vigente -artículo 185 del Código de Procedimiento Civil-. De igual manera, se ha dicho que cuando el traslado de las pruebas fue solicitado por ambas partes, aquellas pueden ser valoradas aun cuando hubieren sido practicadas sin su citación o su intervención en el proceso original y sin su ratificación en el proceso contencioso administrativo, porque, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que una prueba haga parte del acervo probatorio, para luego, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invocar las formalidades legales para su inadmisión.

De la norma y de la jurisprudencia en mención se concluye que: a) la prueba trasladada es la que ha sido practicada válidamente en un proceso y será apreciada sin más formalidades, b) debe cumplir los requisitos que el artículo 174 del CGP establece.

Descendiendo al caso bajo estudio, se observa que lo que busca la parte actora, familiares del señor Cesar Augusto Salazar Arena, es trasladar el cuaderno de pruebas del proceso con radicado nro. 76-147-2222-001-2014-00934-00, demandante: Cesar Augusto Salazar Arenas y demandado: Nación-Rama Judicial, tramitado ante Juzgado Primero Administrativo de Cartago, para que sirvan de soporte en el presente asunto. Al respecto, el hecho número 7⁹ de la demanda relató:

Mediante providencia de 24 de noviembre de 2015, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago declaró administrativamente responsable a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por la injusta privación de la libertad del familiar de los hoy demandantes CESAR AUGUSTO SALAZAR ARENAS y en dicho fallo explicó el Juez que profirió la sentencia que la privación domiciliaria surte los mismos efectos de la privación intra-muros, pero lo que condenó a los demandados de acuerdo a las tablas indemnizatorias determinadas por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y por la totalidad del tiempo que duró la detención.

En vista de lo expuesto, se concluye que la prueba solicitada por el apoderado judicial de la parte demandante es conducente y pertinente y por tanto, procedente su decreto, pues la parte actora pretende que las pruebas que sirvieron de fundamento en el proceso tramitado en el Juzgado Primero Administrativo de Cartago por los perjuicios causados al señor Cesar Augusto Arenas, obren también en el presente asunto, siendo la utilidad un criterio de valoración del juez de conocimiento en la sentencia.

Por tanto, dicha prueba trasladada debe ser decretada.

1) Prueba testimonial

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de octubre de 2019, radicación número: 52001-23-31-000-2010-00673-01(45882).

⁹ Folio 3 del expediente.

El artículo 213 del CGP, establece que se decretarán las pruebas testimoniales solicitadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos indicados en el artículo 212 del CGP, que reza:

“Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde puede ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba

“ ... ”

De la norma transcrita se infiere que se debe expresar en la solicitud (i) el nombre, (ii) el domicilio, (iii) la residencia de los testigos y (iv) brevemente el objeto de la prueba, con el fin de que el juez pueda establecer la pertinencia, conducencia y utilidad.

Una vez revisada la solicitud de pruebas se advierte que la parte actora indicó el nombre de los testigos, y señaló el objeto de su petición, cual es, declarar sobre los perjuicios sufridos por los suegros de la víctima, los daños a la vida de relación y los perjuicios causados a la tía de la víctima, de lo que se concluye que la parte actora cumplió con la carga mínima establecida en el artículo 212 del CGP.

Ahora, si bien no se indicó el lugar de citación donde pueden ser notificados los testigos, este requisito se suple como inicialmente lo hizo el a quo, asignándole la carga de hacerlos comparecer a quien la solicita.

En vista de los anteriores planteamientos, se revocará el auto proferido en la audiencia inicial celebrada el 17 de septiembre de 2019 por el Juzgado Primero Administrativo de Cartago que negó el decreto y práctica de la prueba testimonial y trasladada solicitada por la parte demandante y se ordenará su decreto.

En consecuencia, se;

RESUELVE

PRIMERO- REVOCAR el auto proferido en audiencia inicial del 17 de septiembre de 2019 celebrada por el Juzgado Primero Administrativo de Cartago que negó el decreto y práctica de la prueba testimonial y trasladada solicitadas por la parte demandante conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar, **Decrétese** las pruebas solicitadas por el apoderado judicial de la parte demandante en los numeral 2 y 3 del acápite de pruebas de la demanda¹⁰.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, remítase el expediente al Juzgado de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Vo.Bo Secretario AEI



ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada

¹⁰ Folio 11 del expediente.